

cumplimiento de este modo a las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en materia de espectáculos taurinos.

3.1.2.11. Derecho al deporte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en 2010 un documento con Recomendaciones sobre la actividad física y su influencia en la salud, con el objetivo de proporcionar orientación a los Estados en sus políticas, a nivel nacional y regional. Con referencia a menores de edad señala dicho documento que todos los niños y jóvenes deberían realizar diariamente actividades físicas en forma de juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela y las actividades comunitarias.

Señala la OMS que la evidencia científica disponible con respecto al grupo de edades de 5 a 17 años respalda la conclusión de que la actividad física reporta en general beneficios fundamentales para la salud de niños y jóvenes. Esta conclusión está basada en los resultados de varios estudios, que han observado que el aumento de actividad física está asociado a unos parámetros de salud más favorables, y de trabajos experimentales que han evidenciado una asociación entre las intervenciones de actividad física y la mejora de los indicadores de salud. Algunos de los beneficios documentados son: mejora de la forma física (tanto de las funciones cardio-respiratorias como de la fuerza muscular), reducción de la grasa corporal, perfil favorable de riesgo de enfermedades cardio-vasculares y metabólicas, mayor salud ósea, y menor presencia de síntomas de depresión.

Resulta por tanto muy recomendable que niños y jóvenes realicen actividad física de forma habitual y que esta actividad forme parte de su estilo de vida, evitando el sedentarismo.

En el devenir cotidiano de la práctica deportiva por menores de edad, especialmente cuando ésta se realiza en instalaciones deportivas compartiendo espacios con adultos, se producen situaciones conflictivas, tal como la expresada en la queja 18/0070 en la que una persona usuaria del Centro Deportivo Municipal Poniente, de Córdoba capital, gestionado

mediante concesión administrativa del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba por una sociedad mercantil, nos decía que **adultos y menores comparten la zona de vestuario**, todo ello a pesar de contar el centro deportivo de vestuarios separados para menores, lo cual crea situaciones incómodas, en algunos casos atentatorias a la intimidad y otros derechos personales de los menores.

Tras admitir a trámite su queja nos dirigimos Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, que sobre la cuestión planteada exponía de forma sucinta lo siguiente:

a) El espacio de vestuarios del centro se distribuye en dos amplias zonas, una reservada para actividades en seco y otra para actividades en piscina. A su vez estos espacios de vestuarios están diferenciados por sexo, masculino o femenino, y atendiendo a las necesidades del centro se ha podido habilitar dentro del espacio dedicado a piscina una zona independiente para usuarios menores de edad.

b) La zona de piscina cuenta con un vestuario masculino, un vestuario femenino y tres vestuarios de niños y niñas, de 0 a 8 años acompañados de madres o padres (Se distingue el sexo del acompañante adulto en este caso, ya que la zona de duchas es común para este lote de vestuarios).

c) El funcionamiento de los vestuarios objeto de esta reclamación son concretamente los de la piscina, los cuales, tal como se ha expuesto, disponen de zonas diferenciadas para el cambio de niños y niñas, no sin embargo para las duchas, debido a los condicionantes de la propia edificación, si bien estas duchas están ubicadas en cabinas individuales que garantizan la intimidad.

En condiciones normales, y conforme la distribución mencionada y establecida por la instalación, los vestuarios se utilizan por edades. Si bien, en ocasiones de mayor afluencia, para mayor agilidad y comodidad, algunos niños menores de 8 años acompañados de sus padres o madres utilizan la zona de vestuarios de adultos. No obstante, en todo momento el menor que se encuentra en el vestuario de adulto es acompañado y con

el consentimiento de sus responsables y, por tanto, no se siente expuesto o indefenso ante la interrelación con otros adultos.

Por parte del centro, y aunque la distribución de vestuarios en piscina establece su uso por edades, se intenta ofrecer cierta flexibilidad en las situaciones en las que la demanda de vestuarios es alta, con necesidad de reubicar a las personas que se encuentran sin espacio donde poder cambiarse y se encuentran expuestos a ambientes incómodos. No obstante, si el espacio infantil no se encuentra al 100% de su capacidad, el personal de la instalación indica a los usuarios la obligación de utilizar los espacios definidos para cada edad.

Tras analizar la cuestión comunicamos a la interesada que no apreciamos que con la configuración arquitectónica y organización de la zona de vestuarios de la instalación deportiva se hubiera producido alguna infracción de derechos y/o libertades. Para ello nos remitimos a las conclusiones que alcanzamos al tramitar una cuestión similar en 2013 respecto de la problemática suscitada con los vestuarios habilitados en instalaciones deportivas, por la concurrencia de personas de diferente sexo, y también personas adultas y menores de edad.

Se trata de una cuestión muy particular, sobre la que resulta extraño encontrar referencias normativas explícitas. Es así que no se encuentran referencias sobre el particular en el Código Técnico de la Edificación, el cual sólo incluye indicaciones alusivas a la diferenciación por sexos de los vestuarios y su necesaria adaptación a personas con movilidad reducida.

En lo que respecta a piscinas de uso colectivo hemos de referirnos al Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, que en lo que atañe a vestuarios establece únicamente la necesidad de contar con aseos y vestuarios instalados en locales cubiertos y ventilados, dispensando de dicha obligación a los alojamientos turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal alojado y a comunidades de vecinos donde las viviendas estén próximas a la piscina.

La referencia más aproximada a esta cuestión la encontramos en diversa normativa y documentación sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Esta normativa tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben considerarse en el proyecto y la construcción de instalaciones deportivas.

Las normas reglamentarias que emanan del CSD son de aplicación en todos aquellos proyectos que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en instalaciones deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por la Federación Deportiva nacional correspondiente, que es quien tiene competencias para homologar la instalación.

Por su parte, las normas de proyecto sirven como manual de referencia en la planificación y realización de todo proyecto de una instalación deportiva, siendo de aplicación en todos aquellos proyectos que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y todos aquellos proyectos de instalaciones que se construyan para competiciones oficiales regidas por la Federación Deportiva nacional correspondiente

De este modo en la NIDE 3, no como reglamento sino como norma de proyecto de piscinas, existe un epígrafe referido a piscinas cubiertas, en el que encontramos un apartado (7) relativo a condiciones de diseño, características y funcionalidad de las piscinas cubiertas. Dentro de este apartado 7, se ubica el subapartado (7.11) referido a vestuarios y aseos en el que se prevé una diferenciación de vestuarios masculinos y femeninos, con unas dimensiones mínimas. Y a continuación se precisa que el espacio de vestuarios puede subdividirse mediante elementos separadores ligeros, conectadas entre si para usos diferenciados (vestuario infantil, socios, etc.)

Así pues, las previsiones de las normas NIDE como referencia a la hora de elaborar proyectos de instalaciones deportivas dejan a las claras la división de vestuarios por sexos, pero sin establecer ninguna indicación ni diferenciación por edad de las personas usuarias, ya que contempla

la posibilidad de diferenciación de un vestuario infantil, pero sin recoger mayor precisión al respecto, quedando por tanto al albur de la sensibilidad de quien hubiera de diseñar la instalación o de quien en definitiva dispusiera de facultades para aprobar y ejecutar el proyecto.

Resulta evidente que la división de los vestuarios por sexos responde a una necesidad de moralidad pública, conforme con los usos y normas de comportamiento normalmente aceptadas en la sociedad actual. Y de igual modo se podría predicar del uso de vestuarios e instalaciones sanitarias anexas por personas menores, ya que es comúnmente aceptado que cuando se trata de niños o niñas de corta edad puedan acceder a las mismas acompañados de sus padres, madres, o personas adultas responsables de su cuidado. A partir de cierta edad, conforme las personas menores van ganando en autonomía personal también es socialmente aceptado que concurran en solitario a dichas instalaciones accesorias, en función del respectivo sexo, lo cual puede ocasionar incidentes como los descritos en la queja.

En el actual contexto social cada vez más nos encontramos con personas menores de edad que participan en actividades deportivas o de ocio, que en ocasiones acuden solas y otras veces lo hacen acompañadas de las personas adultas responsables de su cuidado, realizando la actividad en grupo bajo la supervisión de monitores o cuidadores.

Dicha actividad lleva aparejada la necesidad de uso de aseos y vestuarios, y es en este contexto donde suelen producirse no pocas controversias y situaciones en ocasiones nada deseables. Y resulta paradójico que el posible conflicto moral entre personas de distinto sexo, referido a la utilización de vestuarios, haya quedado resuelto por la normativa con una diferenciación clara de las zonas respectivas, y sin embargo no se pueda decir lo mismo de la controversia relatada en la queja, referida a personas adultas y menores.

Desde nuestro punto de vista, el mandato que efectúa el artículo 18 de la Constitución en cuanto a de protección de la intimidad de las personas, y entre ellas las menores de edad, unido a la prevalencia establecida en las leyes del interés superior de las personas menores sobre otros

intereses concurrentes, ha de servir para que se tenga una especial cautela y se otorgue una especial protección cuando la persona usuaria de la instalación deportiva o de ocio es menor de edad, lo cual incluso podría llegar a requerir de una zona diferenciada, y cuando ello no fuera viable, de un tramo horario o condiciones de uso en que no hubieran de compartir dichos espacios tan íntimos con personas adultas.

Y es precisamente lo que se recoge en la respuesta que nos ofrece el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba: Se ha procurado establecer una zona diferenciada para uso exclusivo por menores de edad; las duchas disponen de cabinas individuales que permiten la intimidad y a ellas se permite el acceso de las madres con sus hijos, en edad de 0-8 años. En condiciones excepcionales, de mucha afluencia de público, se tolera que padres o madres puedan acceder a la zona de duchas de adultos acompañados de sus hijos/as, pero sin que este hecho sea la norma habitual ni la prevista para la organización del centro.

Así pues, si bien es cierto que la diferenciación absoluta de vestuarios y duchas para adultos y menores no llega a materializarse, tampoco se puede negar el esfuerzo realizado para garantizar en la medida de lo posible dicha separación, procurando siempre garantizar la intimidad de las personas usuarias, especialmente las menores de edad, lo cual estimamos que en un grado alto sí se llega a garantizar.

Por lo demás, la experiencia acumulada por esta institución en la resolución de cuestiones similares nos lleva al convencimiento de que por minucioso y riguroso que fuese el reglamento de organización y funcionamiento del centro deportivo, las controversias que inevitablemente surgen de la interacción entre personas usuarias suelen resolverse gracias al respeto mutuo y el cumplimiento de reglas no escritas de urbanidad y comportamiento en comunidad, lo cual, tal como la interesada nos expuso en su escrito de alegaciones, es lamentable que no siempre se llegue a materializar, pero creemos que no por ello se han de achacar, en exclusiva, tales males a la distribución de espacios o la organización.

Otra de las cuestiones que de forma reiterada se plantea en las quejas relativas a la práctica de deportes por menores de edad es la queja por la

excesiva competitividad que de forma directa o de modo más sutil se inculca a niños y niñas en edades que habrían de primar aspectos lúdicos y de socialización sobre otros elementos inherentes a la práctica deportiva. En estas quejas nuestra intervención se ve muy dificultada por la maraña de competencias entre federaciones deportivas y las Administraciones Públicas concernidas, bien fuere Administraciones Locales o Junta de Andalucía, y todo ello teniendo en consideración la relación jurídico privada que se produce entre los agentes intervinientes: deportistas menores de edad y sus familias, clubs o asociaciones y su personal técnico. Por ello nuestra intervención en muchas ocasiones queda en una llamada de atención sobre esta cuestión, resaltando la primacía de la formación en valores de los menores y el aspecto lúdico del deporte sobre la competición. A título de ejemplo de las cuestiones que abordamos citaremos la queja 19/1236 en la que una madre se lamenta del trato que recibe su hijo, de 9 años, por parte de la Escuela Deportiva Municipal a la que acude. Refiere que su hijo participa en la competición de fútbol 7 que organiza la Diputación Provincial, y en la que se inscriben clubs, asociaciones, y otras entidades previamente agrupados en la correspondiente escuela deportiva municipal.

El Defensor del Menor quiere promover el deporte entre los más jóvenes: salud, juego, apoyo, competencia, comprensión

La filosofía de la actividad deportiva que organiza la Diputación está orientada a facilitar la participación de niños y niñas que no participen en otras competiciones federadas, primando la sana práctica del deporte por encima de la competición, ayudando a los participantes a mejorar su estado físico y el conocimiento de la concreta técnica deportiva.

Es por ello que la interesada inscribió a su hijo en dicha actividad deportiva, en la creencia de que le ayudarían a mejorar su estado físico -el menor tiene ciertos problemas de salud que le provocan sobrepeso- y se integraría en el grupo de iguales, participando en los partidos de fútbol, jugando más que compitiendo. Pero su sorpresa ha sido que el entrenador ha ido dejando a un lado a su hijo, permitiéndole jugar sólo unos minutos

por partido, haciendo comentarios negativos sobre su estado físico y su habilidad para jugar al fútbol.

En la queja 18/4641 se dirige a nosotros la madre de una menor disconforme con el comportamiento con su hija del entrenador del equipo de baloncesto en el que estaba federada. Nos decía que el entrenador decidió suspender el entrenamiento una vez iniciado, y que sin tener en consideración que se trataba de niños, no de deportistas adultos, no se hizo cargo de ellos hasta que llegaran sus padres o las personas adultas responsables de su cuidado, **deambulando éstos por una zona de concurrencia pública de muchas personas sin que nadie se hiciera cargo de su vigilancia y cuidado.**

En la queja 19/0911 el padre de una chica, de 10 años y con síndrome de asperger, se lamentaba de que **el entrenador decidiera excluirla del club de atletismo en el que estaba federada**, y todo con fundamento en una discusión subida de tono que mantuvieron ellos, los padres, con representantes del club, a cuenta del poco tacto que el entrenador tenía con ella. El padre decía haberse dirigido a la Federación Andaluza de Atletismo, que le comunicó la imposibilidad de intervenir en el asunto por tratarse de un conflicto de ámbito privado, a dilucidar entre el club y la persona afectada. Hasta tal punto llegó el enfrentamiento que el padre decidió presentar una querrela por injurias contra representantes del club de atletismo.

En la queja 18/5484 un padre se queja de que el club en el que está inscrito su hijo se programen los **entrenamientos sin tener en cuenta las altas temperaturas** que se dan en su localidad, sin sensibilidad suficiente para acompañar los entrenamientos a un horario que evite riesgo a los menores que realizan dicha actividad deportiva.

Otra vertiente de la excesiva profesionalización o mercantilización del deporte es la **exigencia para los menores extranjeros de mayor documentación que al resto** (queja 19/5691, queja 19/6029, queja 19/5502). En esta última la interesada nos dice que tiene un hijo, de 10 años, al que adoptó procedente de China al poco de nacer. A su hijo le gusta jugar al fútbol y quiere inscribirse con su equipo en las competiciones que

organiza la Federación Andaluza de Fútbol, pero se encuentra con que la Federación le pide que aporte documentos diferentes que al resto de chicos de su edad, lo cual considera una discriminación injustificada.

Sobre este particular se han de tener presentes las normas internas elaboradas por los organismos internacionales que rigen el “fútbol asociación”, orientadas a proteger a los menores de países subdesarrollados o en vías de desarrollo que pueden ser objeto de explotación o mercantilización por equipos profesionales de fútbol de países desarrollados. En congruencia con esta normativa interna, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) nos respondió que, efectivamente, la documentación requerida para inscribir a los niños y niñas en las competiciones organizadas por la RFAF es distinta para aquellos nacidos fuera del territorio español, y ello puesto que el Reglamento General de la RFAF, en sus artículos 69.3 y 74.3 establece que la licencia definitiva del futbolista es el documento que confirma su inscripción por un equipo de un club, obligándose a aceptar los Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones de las Federaciones Andaluza y Española, también los de la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) y de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

En su virtud, se solicitaron los documentos exigidos por la Federación Española, que no son otros que los requeridos por UEFA y FIFA, y que para las federaciones territoriales de fútbol son de obligado cumplimiento.

En el caso particular del niño citado en la queja, una vez acreditada la situación del menor, se procedió a tramitar su licencia federativa con su club, participando desde entonces en las competiciones federadas de fútbol organizadas por la RFAF.

También en relación con la profesionalización del deporte tramitamos la queja 18/5730 relativa a la campaña organizada por la Federación Andaluza de Fútbol (FAF) dirigida a la **captación de menores, de entre 12 y 14 años, interesados en participar como árbitros** en competiciones de fútbol adecuadas a su edad. Argumentaba el interesado en su escrito que la función que realiza el árbitro de fútbol reviste las características propias de una relación laboral, y que los menores que arbitran partidos

de competencias organizadas por la RFAF no reúnen los requisitos y autorizaciones necesarias para realizar dicha actividad laboral remunerada.

Tras analizar la cuestión respondimos al interesado que el vigente Estatuto de los Trabajadores establece una prohibición genérica de efectuar trabajo remunerado –por cuenta ajena y dependiente del ámbito de organización y dirección del empleador o empresario- para aquellas personas que no alcancen la edad de 16 años, sin que entren en el ámbito de esta prohibición de la normativa laboral los trabajos efectuados en la esfera familiar, los realizados por cuenta propia, o los realizados en el contexto de parentesco, amistad o altruismo.

También señalamos el difícil encuadre legal de ciertas actividades que los menores suelen desarrollar a partir de cierta edad y que carecen de entidad, tales como el reparto ocasional de periódicos, cuidado de animales o la cada vez más frecuente colaboración voluntaria de menores en tareas sociales o comunitarias, actividades éstas muy extendidas y aceptadas socialmente en países de nuestro entorno que las contemplan como un eslabón más en el proceso de maduración e integración social del menor.

Respecto de estas actividades, se han traído a colación el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y la Directiva de la Unión Europea 94/33, que coinciden en reseñar dos requisitos de carácter general: por un lado, que los trabajos realizados por el menor no han de perjudicar su salud, seguridad y desarrollo personal; y por otro, que dichos trabajos no deben afectar su asistencia al centro escolar ni interferir en su rendimiento académico. En lo que se refiere a la edad a partir de la cual puede el menor realizar estos trabajos, el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece los 13 años como límite general, pudiendo en algunos supuestos rebajarse esa edad hasta los 12 años; mientras que el artículo 4 de la Directiva 94/33 fija la edad mínima de 14 años, aunque admite que a partir de los 13 años puedan realizarse algunos tipos concretos de trabajos, con mayores limitaciones en materia de jornada y horarios.

Es por ello que se ha de poner en contexto la actividad aludida en la queja -árbitro de fútbol- en relación con las limitaciones establecidas en la normativa que acabamos de exponer. Para emitir cualquier pronunciamiento sería preciso corroborar el carácter remunerado, por cuenta ajena y dependiente, de la actividad desarrollada por los menores; la habitualidad y regularidad de tales trabajos y su posible incidencia en la salud, seguridad o rendimiento académico de los menores. Y a este respecto, el primer matiz que hemos de reseñar es el relativo a la práctica del deporte a las edades que se citan en el escrito de queja (12-14 años), en las que está excluido su carácter profesional.

La participación de los menores en estas actividades deportivas, por mucho que estuvieran sometidas a la sujeción especial a las reglas federativas y las que regulan la práctica del fútbol, no implican su “profesionalización” sino el ejercicio de esta actividad por mero divertimento, unido a las bondades de la práctica deportiva entre el grupo de iguales, conforme a una reglas aceptadas por todos los participantes.

Por otro lado, en lo relativo a la cuantía económica que reciben los menores por su participación en estas actividades, no creemos que pueda equipararse a la retribución como contraprestación por un trabajo. Se trata de una compensación por la dedicación a esta actividad, paliando los gastos y los perjuicios que los menores o su familia hubieran de soportar, siendo así que de producirse supuestos de conductas abusivas estas habrían de ser supervisadas por la Inspección de Trabajo, por ser el órgano administrativo competente para supervisar el posible incumplimiento de la normativa laboral.

Y por último, para finalizar este apartado, no podemos dejar de lado las actuaciones que realizamos en relación con las quejas en que se alude a **episodios de violencia asociados al evento deportivo**, en muchas de las cuales nuestra posible intervención se ve muy limitada por tratarse de disputas o controversias entre particulares, en ocasiones incluso judicializadas. A título de ejemplo en la queja 19/3630 que narra el enfrentamiento que unos padres tuvieron con el presidente y entrenador del club deportivo en el que estaba inscrito su hijo, el cual derivó en un incidente violento que presenciaron los niños que participaban

en el partido de fútbol. Como consecuencia de dicho incidente fueron expulsados del citado club, y es por ello que solicitaron la intervención de esta institución.

En la respuesta que dimos a esta familia enfatizamos el absoluto rechazo de esta institución al comportamiento de personas adultas que para dirimir sus diferencias recurren al insulto y la descalificación, llegando incluso al empleo de violencia física, ello además en presencia de menores. Llamamos su atención sobre el esfuerzo que vienen realizando los propios menores, sus familias, colectivos sociales y Administraciones Públicas, para erradicar la violencia asociada a la práctica del deporte, siendo una muestra de tales conductas a erradicar las que se describían en su escrito de queja, y que no podíamos por menos que censurar.

También en la queja 19/4347 un padre relata el incidente ocurrido con su hijo, de 11 años de edad, mientras disputaba un partido de fútbol de competición oficial. Refiere que en el transcurso del juego su hijo sufrió una contusión en la cabeza, provocada por la patada muy violenta de un jugador del equipo contrario. Conexa con esta cuestión censuraba que con posterioridad en redes sociales, especialmente Facebook, se publicaran comentarios que hacían dudar de su versión, menoscabando de este modo la honorabilidad de su hijo.

Este incidente y sus repercusiones posteriores ocasionaron fuertes desavenencias entre esta familia, el club adversario y su entorno social, llegando al punto de haber presentado una denuncia ante los juzgados, estando en tramitación diligencias previas penales y un procedimiento civil en el juzgado de primera instancia.

3.1.2.12. Defensa de otros derechos

3.1.2.12.1. Publicidad comercial y ventas a menores

También centró nuestra actividad el **uso instrumental que se realiza de personas menores de edad en unos casos como objetivo publicitario,**